



SENTENCIA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| PROCESO | Ordinario |
| DEMANDANTE | Fredy Esteban Ríos Galvis |
| DEMANDADO | Juan Carlos Martínez Guarnizo |
| RADICADO | 05-001-31-05-013-2020-00273-01 |
| TEMA | Contrato realidad |
| DECISIÓN | Confirma sentencia |

El veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA y GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **336** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **FREDY ESTEBAN RÍOS GALVIS** contra **JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUARNIZO**, con radicado **05-001-31-05-013-2020-00273-01**.

• **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante se declare que con el demandante existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo verbal que terminó unilateralmente por parte del empleador. Como consecuencia, se condene a pagar las prestaciones sociales adeudadas, vacaciones e indemnización por terminación unilateral del contrato por despido sin justa causa.

• **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones las fundamenta el demandante en los hechos siguientes: que laboró al servicio del demandando del 3 de mayo de 2011 al 25 de junio de 2020 mediante contrato verbal, desempeñando la labor de asesor inmobiliario. Que los primeros 4 años de la relación solo se le pagó la salud y el consumo de gasolina de su moto, pero que después se le comenzó a pagar el aporte a pensión y una comisión por ventas del 1.5 % por cada

inmueble vendido. Que al finalizar su relación laboral no le fue pagada su liquidación. Que le reclamó a su empleador el pago de los conceptos laborales, lo que generó que fuera despedido.

- **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Juan Carlos Martínez Guarnizo: se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones al indicar que con el demandante no existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo, toda vez que con este lo que en realidad existió fue una relación contractual de carácter comercial denominado contrato de corretaje, fungiendo como comisionista. Como excepciones de fondo propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción de la acción.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 6 de octubre de 2021, el Juzgado Decimotercero Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones, al considerar que no se demostró la existencia de un contrato de trabajo. Impuso el pago de las costas procesales a cargo del demandante.

- **CONSULTA:**

El proceso fue remitido en grado de consulta atendiendo a que la sentencia no fue objeto de apelación.

- **ALEGATOS:**

Las partes no presentaron alegatos.

C O N S I D E R A C I O N E S:

El problema jurídico para resolver por esta Sala del Tribunal se circunscribe en determinar si se encuentra demostrado o no que el demandante estuvo unido con el demandado a través de un contrato de trabajo del 3 de mayo de 2011

al 25 de junio de 2020. En caso de haber lugar a ello, se resolverá acerca de las acreencias laborales a las que pudiera haber derecho.

Conforme a los principios que informan la carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta (Código Civil, artículo 1757) e incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (Código General del Proceso, artículo 167, inciso 1°). Los postulados anteriores aplicados a un proceso ordinario significan que al demandante le corresponde demostrar el contrato de trabajo, la remuneración convenida, el despido y los extremos temporales de la mencionada relación de trabajo, entre otros.

De conformidad con el artículo 24 del Código del Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

La presunción anterior es de carácter legal y se interpreta de la siguiente manera: cuando el demandante aduce que estuvo vinculado por un contrato de trabajo, le compete demostrar la prestación personal del servicio y el salario percibido y **de inmediato se presume la subordinación jurídica**; empero, el empleador **puede destruir tal presunción probando que la misma no existió**, porque se trató de una relación jurídica distinta a la laboral.

Al respecto debe indicarse que no existe una fórmula taxativa para establecer la existencia de la subordinación, pero si diferentes criterios o indicios a partir de los cuales se pueden fundar diferencias, debiéndose consultar aspectos como: *i)* la forma de determinar el trabajo, *ii)* el tiempo y condiciones de trabajo, *iii)* la forma en que se efectúa el pago, *iv)* la supervisión y control disciplinario, *v)* la propiedad de los medios de producción, y *vi)* la asunción de las ganancias y pérdidas, puesto que mientras en el trabajo independiente estos atributos se predicen de una persona, en el asociado se predicen de una colectividad.

De igual forma, el concepto de subordinación es explicado por el legislador, como la facultad que tiene el empleador de exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos. Está prerrogativa debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. En palabras de la Corte Suprema, Sala Laboral, la subordinación es el elemento diferenciador entre el contrato de

trabajo y otros acuerdos convencionales, por cuanto en el primero el empleador determina elementos como: la jornada de trabajo, el salario e imparte órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Insiste el demandante que laboró al servicio del demandado a través de un contrato de trabajo del 3 de mayo de 2011 al 25 de junio de 2020, fecha esta última que el demandado decidió de manera unilateral y sin justa causa dar por terminado el vínculo; por su parte, señor Martínez Guarnizo alega que con el señor Ríos Galvis no lo unió contrato laboral alguno, toda vez que entre ambos solo existió un contrato de carácter comercial.

Lo primero que se hace necesario advertir, es que el interrogatorio de parte es procedente en la medida en que sea idóneo para provocar confesión, por lo que no pueden tenerse probadas, por sí solas, las afirmaciones realizadas por las partes, salvo las que por confesión pueden advertir alguna situación desfavorable para esta, conforme lo dispuesto por el artículo 191 del Código General del Proceso. De igual forma, existe un principio general, el cual expresa que la prueba no puede ser creada por quien la invoca.

En el caso concreto reconocen las partes la prestación personal del servicio del demandante, pues este se encargaba de buscar clientes y ponerlos en contactos para materializar negocios jurídicos, como el de la venta de inmuebles, manifestando que lo hacía en nombre de Martínez Asociados Inmobiliaria, establecimiento de comercio de propiedad del demandado Juan Carlos Martínez Guarnizo.

Con relación al elemento remuneración, el mismo actor advierte que por parte del demandado no le fue pagado un salario o prestaciones sociales, toda vez que los únicos pagos que percibió de este fue un auxilio de gasolina para su vehículo automotor y el aporte a salud o pensión. Añade a su vez que el pago que percibía por los contratos comerciales obedeció únicamente a las comisiones por ventas que realizaba, las cual prevenía exclusivamente de los clientes.

Lo anterior da cuenta que el demandado no remuneró al demandante por sus servicios, ya que los conceptos económicos que este último percibía provenían

exclusivamente de las comisiones por ventas que realizaba, estando el pago a cargo de los clientes.

Finalmente, se encuentra demostrado que el señor Ríos Galvis no se encontraba subordinado al señor Martínez Guarnizo para realizar sus funciones de agente inmobiliario.

En este punto conviene hacer énfasis con relación al contrato comercial de corretaje, el cual se encuentra regulado en el artículo 1340 del Código de Comercio, el cual establece que:

“Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación.”

El contrato de corretaje comercial ha sido explicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera en sentencia SL2997-2022:

“Ahora, en torno a esa precisa controversia, se impone advertir, que sobre el contrato de corretaje, la Corte ha orientado, por ejemplo en la sentencia CSJ SL1532-2021 que este: i) es un vínculo bilateral, ii) en el que una persona con especial conocimiento de los mercados, ejerce como agente intermediario, iii) cuya tarea consiste poner en relación a dos o más personas con fin de que celebren un negocio comercial, iv) sin que se limite simplemente a contarle a las partes la existencia del negocio, sino a que éstas lleven a cabo el contrato y, en todo caso, v) comunicándole siempre todas las circunstancias conocidas por él, que de alguna forma u otra, puedan influir en la celebración del negocio.”

De una forma más amplia, advirtió la Corte en sentencia SL1532-2021 cuál es la tarea del corredor con el fin de interceder entre algunas partes para que se lleven a cabo el contrato:

“Tal conclusión del Tribunal no se muestra alejada de la línea de pensamiento que esta Sala le ha dado al contrato de corretaje, siendo pertinente traer a colación la sentencia CSJ SL, 20 oct. 2006, rad. 27976, en la que se sostuvo: «[...] conforme al artículo 1341 del C. de Co., en el contrato de corretaje, la persona que por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa de agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, lo hace con el fin de que celebren un negocio comercial, es decir, que su gestión no se limita simplemente a contarle a las partes la existencia del negocio, sino que va mas (sic) allá, esto es, a que esas partes lleven a cabo el contrato». (Subrayado fuera del texto).

Y la homologa Civil, en la sentencia CSJ SC11815-2016, sobre esta misma figura contractual, sostuvo:

En el caso del corretaje, el ordenamiento patrio no deja dudas acerca de que el contrato es bilateral. A partir de lo dispuesto en los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, es definido por la Corte como aquel en que

“una parte llamada corredor, experta conocedora del mercado, a cambio de una retribución, remuneración o comisión, contrae para con otra denominada encargante o interesada, la obligación de gestionar, promover, concertar o inducir la celebración de un negocio jurídico, poniéndola en conexión, contacto o relación con otra u otras sin tener vínculos de colaboración, dependencia, mandato o representación con ninguno de los candidatos a partes” (CSJ SC. Del 14 de septiembre de 2011, rad. 05001-3103-012-2005-00366-01). (Subrayado fuera del texto original).

Destacan en esa definición las principales obligaciones de cada una de las partes, constatándose su bilateralidad, de modo que, dependiendo de quien emitió la oferta, su aceptación tácita a la misma queda demostrada con hechos indubitables que pongan comienzo a la ejecución de las prestaciones a su cargo.

El corredor tiene, pues, una primera obligación consistente en desplegar sus esfuerzos para conseguir interesar a una tercera persona en el negocio que el proponente desea concluir, con la finalidad de relacionarlos, de ponerlos en contacto. A su cargo corren además otras obligaciones, como la prevista en el artículo 1344 del Código de Comercio, referida a “comunicar a las partes todas las circunstancias conocidas por él, que en alguna forma puedan influir en la celebración del negocio”. Pueden asimismo deducirse deberes de confidencialidad, o de imparcialidad cuando ha recibido el encargo de dos personas distintas y eventualmente partes contrapuestas en un contrato (Garrigues) así como la de atender las instrucciones recibidas del comitente. (Subrayado fuera del texto original).

[...]

De suerte que la ejecución del corretaje propuesto significará, para el corredor, el comienzo de esas actividades tendientes a la consecución del tercero interesado así como el de brindar la información pertinente en los términos ya anotados.”

En el caso concreto se debe partir de lo relacionado con la prestación personal del servicio, toda vez que, como se advirtió anteriormente, este elemento se encuentra configurado; no obstante, el servicio que prestó el actor a favor del demandado no fue a través de un contrato de trabajo.

Se lee en el certificado visible en la página 12 del PDF “01Demanda”, realizado por el contador de Martínez Asociados, fechado 17 de julio de 2012, lo siguiente: *“El señor FREDY ESTEBAN RÍOS GALVIS identificado con cédula de ciudadanía No.71.377.009, obtiene ingresos brutos promedio mensual que ascienden a la suma de \$2.000.000, (Dos millones de pesos m.l), por concepto de comisiones por venta de inmuebles en su actividad de corredor inmobiliario independiente desde el 5 de marzo del 2011 por medio de la firma MARTÍNEZ ASOCIADOS INMOBILIARIA, desempeñándose en la ciudad de Medellín y sus alrededores”*. Se aprecia entonces de este certificado, que el señor Ríos Galvis fue tratado como un corredor inmobiliario independiente.

Si bien en la página 10 del mismo documento reposan una serie de consignación de la entidad bancaria Bancolombia, donde se reportan pagos

por valores de \$207.000, \$199.600, \$101.000 y \$180.000, esta prueba por sí sola, al igual que lo consideró la a quo, no da cuenta a qué conceptos se refiere, quiénes son las partes que en ella intervinieron y cuál era su propósito.

De otra parte, de los testimonios rendidos por los señores Dalila Adiel Muñoz Madrid, Edgar Fernando Buitrago López, Juan Guillermo Rivera Mejía y Ricardo René Jaramillo se llega al convencimiento que el demandante se desempeñó como un corredor inmobiliario. Y es que los testigos llamados por el actor dan cuenta que este era corredor inmobiliario y se presentó ante ellos como representante de Martínez Asociados Inmobiliaria. Además, estos desconocen cómo fue la vinculación entre demandante y demandado, desconociendo por sobre todo si medió subordinación entre las partes, toda vez que la información que a aquellos les consta obedece al acompañamiento que hizo el actor con ocasión de la celebración de negocios jurídicos.

De otra parte, los testigos llamados por la pasiva fueron enfáticos en afirmar que la vinculación de las partes se dio a través de una relación jurídica sustancial de carácter comercial, toda vez que el señor Ríos Galvis contaba con autonomía e independencia para desarrollar su función, información que les consta de manera directa. Añadieron que este último no estaba sometido a la subordinación del señor Martínez Guarnizo, toda vez que no cumplía horario, no estaba sometido a una vigilancia u órdenes de algún tipo, no tenía que solicitar permisos para ausentarse de sus funciones, no estuvo sometido a un régimen disciplinario y su remuneración provenía de las comisiones que le pagaban los clientes de los negocios jurídicos.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables, (Ver sentencias CSJ SL2049-2018, SL1469-2021 y SL2262-2022), esta Sala concluye que si bien el actor estuvo unido con el demandado mediante un vínculo contractual, este no se regía por un contrato de trabajo, ya que el servicio que le presentó a este fue de naturaleza comercial y no laboral, toda vez que de la prueba documental se

desprende que no hubo exclusividad frente a la prestación personal de servicio, toda vez que se desempeñó en múltiples labores y frente a personas ajenas al demandado. El elemento subordinación fue desvirtuado por este último al demostrarse que no le impartía órdenes al actor y este no se encontraba sometido a su régimen disciplinario, además que las labores las realizaba de manera independiente. Y el hecho que por parte del demandando se le hubiere dado una camiseta y una tarjeta de presentación, estos elementos por sí solos no son indicativos de un contrato de trabajo, debido a que como lo narraron los testigos, el señor Ríos Galvis se presentaba ante los clientes como agente inmobiliario de Martínez Asociados Inmobiliaria.

Corolario de todo lo dicho, al no probarse la configuración de un contrato de trabajo, la sentencia absolutoria merece ser **CONFIRMADA**.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. En la segunda instancia no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** íntegramente la sentencia que se revisa por vía de consulta, de fecha y procedencia conocida.

Sin costas procesales en esta instancia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| PROCESO | Ordinario |
| DEMANDANTE | Fredy Esteban Ríos Galvis |
| DEMANDADO | Juan Carlos Martínez Guarnizo |
| RADICADO | 05-001-31-05-013-2020-00273-01 |
| DECISIÓN | Confirma sentencia |
| MAGISTRADO PONENTE | Guillermo Cardona Martínez |

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 28 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 28 de noviembre de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO